

sentencia que el juzgado de Distrito de Puebla pronunció el 5 de Setiembre, solo en la parte que dice: "la justicia de la Union no ampara ni protege al C. alcalde 1º de Cholula C. Juan Torres, contra la determinacion del gobernador del Estado, referente á que fuera separado de su encargo y consignado al juez competente para que se le juzgue."

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos correspondientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. — *S. Lerdo de Tejada.* — *Pedro Ogazon.* — *Juan J. de la Garza.* — *José Arceaga.* — *J. M. Lafragua.* — *P. Ordaz.* — *S. Guzman.* — *L. Velazquez.* — *M. Zavala.* — *José García Ramírez.* — *Luis Mº Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre veintitres de mil ochocientos setenta y uno. — *Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. F. de la Vega y Cª, contra una providencia del C. tesorero general del Estado que los obliga á pagar el derecho de mercado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice:

Después de examinar los fundamentos en que se apoya la solicitud de amparo hecha por los Sres. F. de la Vega y Cª á consecuencia del cobro que los hace el tesorero general del Estado por el derecho de tanto por bulto impuesto por el decreto de 31 de

Enero de 1870, encuentra que ninguno de ellos es conforme con nuestra Constitucion y leyes vigentes.

En primer lugar, el referido decreto de 31 de Enero no grava la importacion de efectos extranjeros, que es lo que terminantemente prohíbe la Constitucion federal, sino á los efectos nacionalizados que han sido importados en otro Estado y que se traen al de Sinaloa para su comercio interior.

En segundo lugar, este derecho que el mismo decreto llama de mercado, está en las atribuciones del gobierno que lo creó y de ninguna manera invade la esfera de la autoridad federal, habiéndose comprendido por los solicitantes en las disposiciones de la fraccion 1ª art. 112 de la Constitucion federal.

En tercer lugar, no se puede alegar en favor de la referida solicitud la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia que amparó á los Sres. Ibarra Dondé y Cª de Yucatan, puesto que allí se trataba de la ejecucion de una ley que impono á efectos extranjeros importados por el mismo Yucatan; y no á efectos nacionalizados importados por Guaymas y conducidos despues á este puerto.

El que suscribe confiesa, que en efecto, la imposicion de estos derechos puede causar algun desnivel en el comercio interior de Estado á Estado; pero mientras no se ataque directamente la ley que permite á estos la facultad de decretar cierta clase de impuestos, no puede ver la invasion de facultades en que se apoyan los peticionarios para impetrar el amparo de la justicia federal.

Debe decir tambien, que el C. tesorero del Estado no ha rendido el informe justificado que previene la ley, pues malamente puede darse este nombre al en que solo se reduce á decir que ejecutó lo dispuesto por el decreto del gobierno de 31 de Enero de 1870, cosa que ya sabiamos de antemano; y ni aun siquiera indica sobre qué bultos

se impusieron los ciento ocho pesos setenta y cinco centavos de derechos, ni expresa si entre estos están ó no comprendidos los frascos de azogue de que habla el otro sí del escrito de los Sres. F. de la Vega y Ca. Semejantes informes en nada esclarecen los puntos cuestionados, y no son sin duda lo que quiso la ley que fueran, es decir, puntos de apoyo para la autoridad judicial.

El que suscribe hubiera deseado, que los señores solicitantes hubieran tenido que presentar esta solicitud después de conocerse la resolución de la Suprema Corte en el caso enteramente igual que tiene á su conocimiento: el que habla habria tal vez emitido su opinion en otros términos y no como hoy lo hace pidiendo que no es ^{no} accederse al amparo pedido.

Mazatlan, Agosto diez y siete de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado).—
L. Gaona.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Agosto veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos. los Sres. F. de la Vega y Ca. piden amparo contra la providencia del C. tesorero general que los obliga á pagar (108 \$ 75 cs.) ciento ocho pesos setenta y cinco centavos, por setenta y cuatro bultos de efectos nacionalizados en Guaymas ó importados á este puerto en el buque nacional "Zumalacarreui" conforme al decreto del gobierno fecha 31 de Enero del año próximo pasado que establece el derecho de mercado á los efectos que hayan sido nacionalizados y se introduzcan al Estado, cobrándose por cada bulto de toda clase de tegidos, un peso cincuenta centavos á los de abarrotes y setenta y cinco á los no especificados. Los quejosos fundan su demanda, en que con tal decreto se quebranta la frac. 1ª del art. 112 de la Constitución general, á la vez que tal impuesto debe tenerse en realidad como de exportacion,

el que está reservado solo á la autoridad federal; y aunque al entablarse aquella se pidió la suspension de tal providencia, no se decretó de plano, sino hasta que ocurrieron los quejosos manifestando que se los estaban embargando bienes para el pago de aquel cobro, por cuya circunstancia se consideró de urgencia notoria la suspension y fué decretada; mandándose seguir los trámites correspondientes al juicio de amparo, y pedido informe á la autoridad que dictó la providencia que motiva el juicio, no negó el hecho, y solo dice que para ello se fundó en el citado decreto y en la ley núm. 186 de 15 de Mayo último que dió la Legislatura del Estado declarando como una de sus rentas tal impuesto; se pasaron en seguida los autos al fiscal, quien fué de parecer que no procede el amparo que se solicita, y citadas las partes para sentencia se dieron por concluidos los autos; y

Considerando que el C. tesorero general del Estado apoya su providencia en el decreto y ley ya citadas, cuyas disposiciones por ser dadas contra la fraccion 1ª del art. 112 del pacto fundamental atacan á las garantías que él dispensa; supuesto que al imponerse el derecho que se llama de mercado á los efectos extranjeros nacionalizados, ya se les impone un gravamen que les es prohibido á las legislaturas establecer, por que en realidad de verdad tal impuesto debe estimarse como de importacion y por consiguiente reservarse á la autoridad federal.

Considerando tambien: que aunque los Estados por medio de sus Legislaturas son libres para reglamentar su regimen interior y establecer contribuciones con que subvenir á sus atenciones, tal libertad está restringida á que en ningun caso se contravenga por ello á las estipulaciones del pacto federal, segun el art. 41 de la misma Constitución general:

Considerando por último: que al establecer el gobierno y la Legislatura del Es-

tado el derecho de mercado que cobra el tesorero general á los Sres. F. de la Vega y C^a se gravan á los efectos nacionalizados en otros Estados sin permiso del Congreso general: ocasionándose con esto una violación expresa de las garantías otorgadas en la repetida frac. 1^a del art. 112 del Código fundamental y por cuyo motivo deben considerarse á los quejosos con apoyos demasiado fuertes para entablar su demanda. Por estas razones y teniendo á la vista la ejecutoria dada por la Suprema Corte de Justicia á favor de los mismos demandantes que por igual cobro se quejaron y de él fueron amparados por este juzgado de Distrito, se falla con las siguientes proposiciones.

Primera; la justicia nacional ampara y protege á los Sres. F. de la Vega y C^a contra la providencia del C. tesorero general del Estado que los obliga, en cumplimiento al decreto fecha 31 de Enero del año próximo pasado y á la ley núm. 136 de 15 de Mayo último dado por la Legislatura del mismo, á pagar (108. \$ 75 cs.) ciento ocho pesos setenta y cinco centavos, por derecho de mercado correspondiente á setenta y cuatro bultos de efectos nacionalizados en Guaymas ó importados en este puerto por el buque nacional "Zumalcarregui."

Segunda: sacándose dos copias de esta sentencia, una para que sea publicada en el periódico oficial del Estado y la otra para remitirse al Semanario Judicial, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, despues que sea notificada aquella. El juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia.—*Pedro S. Bermúdez.*—*A.*—*Miguel Salas.*—*A.*—*Ramon Lizarraga.*

Ejecutoria dela Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 5 de Agosto último promovieron ante el juez de Distrito del Estado de Sinaloa los Sres. F. de la Vega y compañía, vecinos y del comercio de Mazatlan, alegando, que el tesorero general del Estado los obliga á pagar ciento ocho pesos setenta y cinco centavos por el derecho llamado de "mercado" correspondiente á setenta y cuatro bultos de efectos extranjeros nacionalizados en Guaymas ó importados á Mazatlan por el buque nacional Zumalacarregui, en virtud del decreto del gobernador, fecha 31 de Enero de 1870, que gravando las importaciones sin el consentimiento del congreso de la Union viola el precepto contenido en la fraccion 1^a del art. 112 de la Constitucion federal. Visto el informe del tesorero responsable en que expone: que ha hecho el cobro que se reclama en virtud del decreto que se cita y por la ley número 136 de 15 de Mayo de 1871, dada por la Legislatura del Estado, declarando como una de las rentas de este el derecho de "mercado." Visto lo pedido por el promotor fiscal y las demás constancias de autos.

Considerando: que aun cuando los Estados de la federacion en uso de su soberanía pueden dictar leyes para su régimen interior, tienen que sujetarse á las prevenciones de la Constitucion de la república: que el gobernador de Sinaloa en su decreto de 31 de Enero de 1870 que impone el derecho de "mercado" á los efectos extranjeros nacionalizados que se introduzcan en el Estado, ha procedido sin el consentimiento del Congreso de la Union contra lo dispuesto en la fraccion 1^a del artículo 112 antes dicho: y que en consecuencia, ese decreto invade la esfera de la autoridad federal, y funda, conforme á la fraccion 3^a del art. 101 de la Constitucion de

la república y la ley de 20 de Enero de 1869 el amparo pretendido; se resuelve que: por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia que en 24 de Agosto de este año pronunció en Mazatlan el juez de Distrito de Sinaloa, diciendo en su parte resolutive, que la justicia nacional ampara y protege á los Sres. F. de la Vega y compañía contra la providencia del C. tesorero general del Estado que los obliga, en cumplimiento del decreto fecha 31 de Enero del año próximo pasado y de la ley número 136 de 15 de Mayo último dada por la Legislatura del mismo, á pagar ciento ocho pesos setenta y cinco centavos por derecho de "mercado," correspondiente á setenta y cuatro bultos de efectos nacionalizados en Guaymas é importados en Mazatlan por el buque nacional Zumalarréguí.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazón.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—S. Guzman.—L. Velazquez.—José García Ramírez.—M. Zavala.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Octubre primero de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*.

CRIMINAL.

Causa instruida en el juzgado de Distrito de Guanajuato contra Petra Mendoza, por portacion y circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que Petra Mendoza fué presa en Silao con fecha diez de Abril anterior, acusada y procesada por el doble delito de portacion y circulacion de moneda falsa.

Practicadas las diligencias á que ha habido lugar, resulta: que Tiburcia Reyes y su hija Dolores del mismo apellido, menor de edad, aseguran que la procesada fué á comprarle á la primera tiaco de leche que le pagó con un real falso. El promotor comprende bien, que el dicho de la joven Dolores no puede considerarse con la fuerza de una declaracion producida por testigo idoneo, mayor y libre de excepcion, pero sí adquiere este testimonio la necesaria robustez, adminiculado, como lo está con la circunstancia de habérsele recogido á la acusada otra moneda falsa, siendo de notar que no la traía en union de otras buenas que tambien portaba, sino escondida en la boca, destruyendo con este hecho la esculpacion que alega de haber recibido esta moneda en la inteligencia de que era buena.

Por último, las declaraciones de las acusadoras; la de Manuel Hernandez que destruyó el real falso con que la procesada pagó la leche; la existencia de la moneda falsa que corre en la causa; la calificación que de ella han hecho los peritos, y la fé dada por el juzgado, son pruebas suficientes para dar por comprobada la existencia del cuerpo del delito.

Por lo que queda expuesto, el promotor que suscribe creo, que la causa que tiene á la vista arroja los datos suficientes para